

EL SOCIALISTA

292

Centroamericano



Primera Quincena
Septiembre 2019

Guatemala: Q 4.00
Honduras: L 12.00
El Salvador: US\$ 0.60
Nicaragua: C\$ 10.00
Costa Rica: ₡ 500.00

“Por la Reunificación Socialista de la Patria Centroamericana”

www.elsoca.org

www.facebook.com/elsoca.org

www.twitter.com/elsocca

**TRUMP PRETENDE
APLICAR A TODA
CENTROAMÉRICA EL
STATUS DE “TERCER
PAÍS SEGURO”**



**EL SALVADOR.- UN BALANCE DE LOS 100
DÍAS DE GOBIERNO DE BUKELE**



**GUATEMALA.- ¡NO
AL ESTADO DE
SITIO! ¡NO A LA
REPRESIÓN CONTRA
LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS!**



GUATEMALA.- Gálvez y Murphy: dos rectores y una sola mafia



EL SALVADOR.- Bukele pretende imponer nueva Junta Directiva en el STISS



NICARAGUA.- ¿Represión contra el COSEP?

TRUMP PRETENDE APLICAR A TODA CENTROAMÉRICA EL STATUS DE “TERCER PAÍS SEGURO”

La administración de Donald Trump viene librando una feroz batalla en múltiples frentes externos e internos, en su desesperada obsesión de contener la migración hacia Estados Unidos. Igual que la Roma imperial en la antigüedad, la economía de Estados Unidos es un imán que atrae oleadas migratorias desde diferentes puntos del planeta.

La migración es un fenómeno de la economía mundial: las relativamente boyantes economías imperialistas de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), atraen a millones de personas que abandonan sus territorios, países y zonas geográficas que, como Centroamérica, han caído en la barbarie producto de la super explotación capitalista e imperialista.

Trump niega que Estados Unidos es una nación de migrantes, un verdadero mosaico de nacionalidades. A nivel interno en Estados Unidos, Trump libra una batalla legal contra jueces federales que, fieles a dos siglos de democracia burguesa, han paralizado sus intentos de restringir el derecho de asilo, uno de las conquistas de la democracia imperialista norteamericana. Persigue a los migrantes, separa a sus familias, alienta el supremacismo blanco con el objetivo de evitar que los hijos y nietos de migrantes anglosajones se conviertan en minoría, ante el crecimiento demográfico de los migrantes de origen latinoamericano y de otras nacionalidades.

A nivel externo, ha promovido acuerdos bilaterales con algunos países para convertir sus territorios en “tercer país seguro”, como una forma de evitar que los migrantes que pisan suelo norteamericano soliciten el asilo, conforme la legislación norteamericana. Este concepto de “tercer país seguro” deviene de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, del año 1951, que permite negar el derecho de asilo y trasladar a esa persona solicitante a otro país.

La administración Trump firmó con México un acuerdo que incluye, entre otros aspectos, que México será un tercer país seguro, pero ante la resistencia de Andrés Manuel López Obrador, Trump amenazó con imponer nuevos aranceles a los productos mexicanos, y con ello Estados Unidos obtuvo una victoria casi total. Aunque Trump no ha podido construir el prometido muro en la frontera con México, logró que el gobierno de México instalara un muro militar con la recién creada Guardia Nacional (GN) en la frontera con Guatemala, reduciendo en pocas semanas el flujo migratorio a la mitad.

Después las presiones se trasladaron a Guatemala, donde el gobierno cipayo de Jimmy Morales, firmó un acuerdo de tercer país seguro, en relación a la migración proveniente de El Salvador y Honduras.

Recientemente, Kevin McAleenan, secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se reunió con el presidente Bukele para lograr que El Salvador se convirtiera en otro “tercer país seguro”. Al final, no hubo necesidad porque Bukele se comprometió a frenar la migración salvadoreña, y detener a los migrantes de otras nacionalidades bajo la figura legal del combate a la “trata de personas”.

Las presiones de Trump han continuado sobre el gobierno de Honduras, aquejado y debilitado por los escándalos de corrupción y narcotráfico. A pesar que los medios de comunicación han informado que el gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) firmó un acuerdo de tercer país seguro con la administración Trump, el canciller Lisandro Rosales ha desmentido la información, pero “cuando el río suena, piedras trae”. El gobierno de Honduras, igual que el de El Salvador, se han comprometido a frenar la migración en sus propios países, y es casi seguro que ya aceptaron convertirse en tercer país seguro para los migrantes de otras nacionalidades.

Las presiones de Trump también tocaron al gobierno de Costa Rica, aunque este negó la necesidad de suscribir un acuerdo similar al de México o Guatemala. El único país que Trump no ha presionado, es a la dictadura Ortega-Murillo porque esta fue la primera en crear una muralla fronteriza contra la migración ilegal, hace más de tres años.

Trump ha utilizado la renovación del TPS como un mecanismo de presión contra los gobiernos cipayos de Centroamérica. La diplomacia de Trump está convirtiendo a todos los Estados de Centroamérica en verdugos de su propia población migrante y en carceleros de los migrantes de otras nacionalidades. Con ello, igual que el aprendizaje de brujo, Trump está desatando fuerzas infernales que después no podrá controlar. ■

EL SOCIALISTA
Centroamericano

ESCA No. 292
Primera Quincena
Septiembre 2019

Impresión:
11 Septiembre 2019

DIRECTOR:

Victoriano Sánchez

CONSEJO EDITORIAL:

Armando Tezucún,
Germán Aquino,
Alberto Castro,
Melchor Benavente,
Eduardo Villalobos,
José Manuel Flores Arguijo
(in Memoriam).

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Ricardo Ruiz

AQUI NOS ENCONTRÁS

www.elsoca.org
facebook.com/elsoca.org
twitter.com/elsoca

Redacción:

elsoca@elsoca.org

Secretariado Ejecutivo:

psoca@elsoca.org

Secciones:

psoca_guatemala@elsoca.org
psoca_salvador@elsoca.org
psoca_honduras@elsoca.org
psoca_nicaragua@elsoca.org
psoca_costarica@elsoca.org

EL SOCIALISTA
CENTROAMERICANO
es una publicación del
PARTIDO SOCIALISTA
CENTROAMERICANO
(PSOCA).

fundado y reconstituido
el día 4 de Abril del año 2009.

Se publica en dos formatos:
una versión digital que se
actualiza diariamente
(www.elsoca.org) y otra
versión impresa que se publica
quincenalmente.

Los artículos firmados no reflejan
necesariamente la opinión
editorial del **PSOCA**, sino la
exclusiva responsabilidad de sus
autores.



BUKELE PRETENDE IMPONER NUEVA JUNTA DIRECTIVA EN EL STISSS

Por Francisco Guardado

Con gran sorpresa ha sido recibida por los trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la notificación del Colectivo Fuerza STISSS liderado por Ricardo Jesús Monge Cornejo de ser el nuevo Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS), lo cual han comprobado a través de notificación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en donde se le reconoce como tal.

Golpe a la democracia y libertad sindical

Según resolución emitida por la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social emitida con fecha tres de septiembre del dos mil diecinueve la cual dice: "Vista la documentación presentada al departamento Nacional de organizaciones sociales de esta dirección a las trece horas con cincuenta minutos del día uno de julio del año dos mil diecinueve, suscrita por el señor Ricardo Jesús monje Cornejo en su calidad de Secretario General electo del Sindicato de trabajadores del instituto salvadoreño del seguro social cuyas siglas son STISSS, en la cual informa la destitución y expulsión de las personas que actualmente conforman la junta directiva general de dicho sindicato y que se le autoricen la inscripción de la nueva Junta Directiva General electa así como la extensión de las credenciales y carnes correspondiente. Al respecto, esta dirección tiene bien hacer los siguientes CONSIDERACIONES:"

Entre las consideraciones se destacan el hecho que la realización de Asamblea Extraordinaria de Segunda Convocatoria estuvieron presentes trescientas veinte personas afiliadas al STISSS.

Después de hacer sus consideraciones la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo

y Previsión Social resolvió a favor de lo solicitado por el señor Ricardo Jesús monje Cornejo en su calidad de Secretario General, cancelándose las Credenciales a la actual Junta directiva y otorgándose a la nueva Junta hasta diciembre del 2019.

Con dicha resolución la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social violenta la

mismo estado democrático de Derecho.

Trabajadores y organizaciones sindicales debemos condenar y denunciar el golpe dado a la actual Junta Directiva del STISSS por parte del Ministerio de Trabajo, si dejamos que esto continúe hoy es el STISSS mañana serán otros sindicatos, posteriormente serán las prestaciones que han sido conquistadas con lucha y sangre.



Unidos somos fuertes contra la amenaza

Si bien es cierto la actual Junta del STISSS ha tenido desaciertos y existen diferencias internas, en este momento lo urgente es unidad de acción en la lucha de todos los colectivos y trabajadores, para defender la democracia y luchar contra los planes intervencionistas del actual gobierno, los cuales ponen en riesgo la estabilidad laboral y el contrato colectivo.

Debemos defender la independencia sindical respecto a cualquier gobierno. Venimos de sufrir las consecuencias de ello, bajo los gobiernos de ARENA y últimamente con el gobierno del FMLN. Los únicos intereses que deben prevalecer en el STISSS son los intereses de los trabajadores.

Por una junta directiva con representación proporcional

La actual Junta Directiva del STISSS liderada por Armida Franca vive un momento histórico y tendrá que decidir entre entregarle al actual gobierno la dirección del STISSS lo cual sería desastroso, o reunificar al STISSS similar al 2009. El gobierno de Bukele debe ser desenmascarado demostrando que la Junta Directiva impuestas no goza de representatividad.

Se debe terminar con los fraccionamientos internos del STISSS para lo cual debe constituirse una Junta Directiva Representativa integrada con representantes de todos los colectivos, la cual debe ser proporcional al número de votos. ■

Constitución de la Republica, Tratados Internacionales, y Leyes de la Republica ya que dicha Asamblea en base a la cual dieron Credenciales a la Nueva Junta Directiva del STISSS no fue realizada en base a los términos establecidos en los Estatutos debido a que el número de asistentes que se menciona fue inferior a los mencionados en la misma, dicha resolución no es apegada a Derecho más pareciera una decisión apegada a intereses del gobierno.

Defendamos las libertades sindicales y contratos colectivos

El golpe dado a la actual Junta Directiva del STISSS debe poner alerta a todos los trabajadores y organizaciones sindicales del país, ya son varias las amenazas contra los trabajadores y contratos colectivos por parte del presidente Bukele, quien para poder concretizar sus amenazas necesitan representantes sindicales dóciles o Juntas Directivas afines a su gobierno los cuales si partimos del anterior hecho busca imponer irrespetando la democracia sindical y el



LA CICIG HA MUERTO NADA HA CAMBIADO

Por Leonardo Ixim

El vencimiento del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) después de doce años de presencia, clausura un momento político y pone en el tapete el reacomodo de los distintos factores de poder y fracciones de la clase dominante, de cara a iniciar un nuevo gobierno.

El origen de la CICIG

La CICIG fue un instrumento sui-generis organizado desde la Organización de Naciones Unidas. Nació no sin fuertes conflictos con los poderes oligárquicos; esta comisión tuvo el objetivo de dismantlar los denominados Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). Esa negociación de su origen tuvo varios contratiempos, porque en la propuesta inicial el alcance de este organismo para dismantlar estos cuerpos era más profundo, al igual que contenía una mayor autonomía para la investigación penal, aunque eso fue moldeado para lograr su iniciación. Así se logró que junto al Ministerio Público la CICIG acompañara procesos penales, estableciéndose para ello la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI).

La CICIG fue resultado de un pedido de diversos organismos de la sociedad civil en consonancia con lo planteado en los Acuerdos de Paz, que denota el carácter socialdemócrata de éstos, la debilidad producto de la fragmentación de las organizaciones sociales, pero también la incapacidad de la izquierda ex insurgente de ser una fuerza electoral. Eso a diferencia de El Salvador, donde la izquierda entró ese proceso con mucha fuerza -al grado de convertirse en gobierno-cooptó la sociedad civil y se convirtió en un elemento de la gobernabilidad burguesa, negándose a instalar

instancias como la CICIG aduciendo la fortaleza de las instituciones como una forma de tapar sus hechos de corrupción.

Los CIACS son estructuras -muchas de ellas conformadas desde la contrainsurgencia- que con nexos políticos, militares y empresariales se enriquecen legal e ilegalmente desde el control de espacios dentro del Estado, conformando lo que se denomina élites



emergentes o lo que también desde el marxismo se entiende como nuevas burguesías creadas al amparo del control del Estado.

El carácter de la CICIG

La izquierda reformista latinoamericana por su parte -en Guatemala solo un sector minoritario, el de la ex ANN asume esta tesis- maneja que estas comisiones son instrumentos de intromisión del imperialismo. En efecto, el tema de la corrupción o el combate al crimen organizado son caballos de Troyas de aquel, pero su argumentación es en función de que no les evidencien cómo estas izquierdas, al adaptarse a los sistemas burgueses, reprodujeron prácticas corruptas. En Guatemala la CICIG tiene un origen especial, y los objetivos

se entrelazaron con la agenda del Departamento de Estado en materia de fortalecer el Estado de Derecho, eso ante los Frankensteins (los CIACS) que los mismos gringos ayudaron a conformar y ahora son un problema para los intereses de la burguesía mundial. Así, mucha de la cooperación técnica a la CICIG proviene de Estados Unidos, pero también de varios países europeos, entre los que sobresalen Holanda y los países escandinavos.

Con respecto al desempeño de la CICIG, podríamos dividirlo en dos etapas a saber: La primera con los comisionados Carlos Castresana de origen español y Francisco Dall'anese costarricense, cuyo su accionar estuvo más relacionado con afectar a grupos emergentes alejados de las élites oligárquicas, para lo cual contó con el apoyo de éstas, aunque

señaló las prácticas de limpieza social llevadas a cabo por funcionarios del gobierno pro-empresarial de Oscar Berger, ahora bajo procesos penales, como el ex ministro de gobernación Carlos Vielman.

La segunda etapa, dirigida por el colombiano Iván Velázquez, que venía de dismantlar parte de la para-política, siendo Álvaro Uribe su enemigo a muerte. Primero continuó dismantlando estas élites emergentes, pero ahora más ligadas a los grupos oligárquicos, como la que se creó tras la conformación del desaparecido Partido Patriota, y luego fue tocando cada vez -con temas de financiamiento electoral ilícito a ese partido y al actual partido de gobierno- así como con investigaciones sobre defraudación fiscal, a núcleos de la oligarquía. Se



sabe que hay investigaciones de la CICIG contra empresarios que han sido beneficiados con licencias ilegales para la explotación minera y de otros recursos naturales, pero es posible que la actual fiscal general Consuelo Porras, a diferencia de la anterior Thelma Aldana, que tuvo una coordinación especial con Velázquez, no profundice esas investigaciones.

En ese proceso es donde se entretajeron intereses ya no solo de fracciones burguesas emergentes, sino también oligarcas, el mismo concepto de CIACS fue modificando en la jerga cicigiana a Redes Político Económico Ilícitas (RPEI). Señalando el financiamiento ilícito electoral como la forma con que esas redes se apropian de partidos políticos que le sirven a sus intereses y que además están hechos para eso.

De esa forma fue que las relaciones con el saliente gobierno cambiaron, de cordialidad -además de las investigaciones contra miembros de su familia- y fueron enturbiándose y de ser un gobierno pro CICIG y aliado en la lucha contra la impunidad se volvió un gobierno que fue parte del proceso de articulación de los grupos que fueron afectados por las investigaciones de ésta.

De esa forma, desde finales del 2018 al comisionado Velázquez le es prohibido entrar al país y paulatinamente fueron eliminando la presencia de los investigadores internacionales, aun contraviniendo las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, que censuraron al gobierno por tales acciones y le exigieron garantizar la seguridad del ente internacional. Así, era lógico que en septiembre cuando se vencía el mandato de permanencia de la CICIG, este gobierno no lo iba a renovar, quedando en suspenso la FECCI, que demagógicamente la fiscal general Porras menciona que la mantendrá, buscando otras formas de

cooperación para su funcionamiento, pero sin renovarles contratos a los investigadores.

La Naturaleza del Estado según la CICIG



Por último, es importante debatir una de las concepciones acerca del Estado guatemalteco que popularizó la Comisión Internacional y que diversos actores repiten como losos sin hacer análisis profundos. Nos referimos al de la captura y cooptación del Estado. Si bien algo cierto es que la CICIG demostró con herramientas criminológicas una verdad conocida, de cómo las distintas fracciones burguesas (emergentes por medio de los denominados CIACS y tradicionales ahora con la conformación de las RPEI) se enriquecen desde el Estado, evidenciando como éste es el elemento central del actual modelo de acumulación capitalista.

Sin embargo, es muy distinto aceptar que el Estado primero fue capturado por los famosos CIACS y luego fue cooptado por las RPEI. Esto da la idea de que hubo una época -a saber, en qué momento- en la cual el Estado sí cumplía las funciones que teóricamente todo Estado capitalista dice cumplir, la de promocionar el bien común obviando las formas de régimen político que la burguesía cafetalera o los militares asumieron, aunque tiene que reconocer que la corrupción ha sido un modus vivendi de estas élites

desde la colonia.

Además, da la idea de que el Estado fue neutral -la falsificación más grande de la ideología burguesa- y que no había sido tomado por estas élites y que ahora dejó de serlo porque éstas lo usaron a su favor. Negando entonces que el Estado desde sus orígenes fue no solo instrumento de las clases dominantes para lograr la acumulación económica y política, sino cada vez más estas clases fueron acomodando el Estado para convertirlo en un elemento más de los procesos de acumulación capitalista, estatizando el poder económico y hegemonizando la sociedad. Obviamente con algunos resquicios de libertades y garantías sociales sobre todo posterior a la firma de la paz.

Reafirmando entonces cuál fue entonces el objetivo principal de la CICIG, es decir el de garantizar el Estado de derecho burgués para que las distintas fracciones burguesas compitan "sanamente", y controlar lo más posible el capital de origen criminal. De esa forma temas como la migración, el terrorismo, el tráfico de armas y otros enseres, no serían un peligro para los intereses geopolíticos de la potencia estadounidense.

Para la clase trabajadora y los pueblos de Guatemala, la salida de la CICIG y la contra-ofensiva que estos poderes fácticos tradicionales y emergentes impusieron en los últimos meses a la Comisión Internacional, poderes que ahora respiran tranquilos por la naturaleza del nuevo gobierno, nos deja una lección. Que no es con el cuento de recuperación de instituciones -como si alguna vez fueron nuestras- o que se avanzó porque se desmontó tal o cual grupo corrupto, que se logrará una democracia. Sino avanzando por hacia la revolución socialista centroamericana y un primer paso, será con el proceso de conformación y convocatoria de una Asamblea Constituyente Originaria, de los Pueblos y los Trabajadores. ■

GUAPINOL Y LA TIGRA: MÁS DESPOJO DE PROYECTOS EXTRACTIVOS

Por Andrés Morales

El pasado lunes 26 de agosto, se reabrió el caso Guapinol, uno de los expedientes judiciales que muestra sin ambages, la situación concreta de las instituciones encargadas, aparentemente, de impartir justicia en el país. Las salas de los tribunales volvieron a retomar este caso que mostró desde un inicio, el ensañamiento y confabulación de las empresas extractivas en manos de empresarios nacionales, bancos y organismos financieros internacionales, y el Estado hondureño. El absurdo dictamen de los jueces fue “prisión preventiva”; los compañeros pasaron de estar en la penitenciaría ubicada en Támara, Departamento de Francisco Morazán, a la Tolva. En total son siete miembros de esta comunidad acusados injustamente de portación ilegal de armas y “asociación ilícita”.

“Los imputados son: Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez...” (Criterio.hn, 26 de agosto de 2019).

Los propietarios de este proyecto minero que fue denominado ASP y ASP 1, ahora de Inversiones Los Pinares, son Lenir Pérez y Ana Facussé; apellido éste último sumamente conocido por ser de vínculo consanguíneo directo con el que fue uno de los representantes más detestables de los terratenientes que alimentaron el conflicto agrario en el Bajo Aguán: Miguel Facussé.

Mientras se llevaba a cabo el proceso de juzgamiento en contra de estos ambientalistas, hubo acompañamiento incondicional de parte de la comunidad de Guapinol, ciertos defensores de derechos humanos y estudiantes universitarios, que, con pancartas, marcadores y suficiente indignación por las circunstancias, hicieron notar las injusticias cometidas

por los tribunales del país.

Según un artículo del periódico digital Criterio.hn, el caso Guapinol ya suma en total seis muertes de dirigentes comunales, quienes defendieron hasta las últimas consecuencias este río. El río Guapinol se encuentra cercano a la zona núcleo y alrededores del Parque Nacional de Botaderos, “establecida desde el año 2012 como zona protegida y ahora conocido como Parque Nacional Carlos Escaleras, en memoria del líder ambientalista Carlos Escaleras” (Criterio.hn, 21 de febrero de 2019).

Dos autores consabidos sobre el tema de la defensa del agua, suponen lo que sigue al respecto del papel del Estado y la gestión de este recurso primario: “...el papel del Estado en la gestión del agua ha aumentado considerablemente desplazando a los viejos sistemas autogestionarios. Esto ha producido una erosión de las estructuras administrativas democráticas y participativas, lo que a su vez deteriora las fuentes productoras y los procesos de conservación...” El caso Guapinol –comunidad ubicada en Tocoa, Departamento de Colón–, viene a demostrar el papel del Estado hondureño en la mala gestión del agua, con procedimientos de despojo territorial, por un lado, al conceder a través de instituciones como Mi Ambiente e ICF, licencias ambientales que permiten acabar con reservas naturales; y por otro, las políticas encaminadas al ecocidio mediante las famosas “concesiones” que liquidan las decisiones comunitarias en no permitir el acceso del modelo extractivista.

Los compañeros de Guapinol, que hoy lidian con el encierro y por consiguiente la pérdida de su libertad, colocan en su justa dimensión un fenómeno que atañe a las distintas generaciones de hondureños –sino a todos–: la lucha frontal contra el modelo extractivista en su faceta minera, que tiene grandes consecuencias, como lo

asegura Esperanza Martínez: La minería utiliza grandes cantidades de agua para obtener los metales. Este líquido contaminado normalmente es vertido en sus cursos originales... Las minas a cielo abierto secan las vertientes de agua e implican la eliminación de toda vegetación. Esto afecta la absorción del agua además que el polvo y los desechos de la mina contaminan las fuentes de agua cercana.”

Otro caso que muestra el modelo entreguista y concesionario: el proyecto habitacional en La Tigra

La tendencia general en las ciudades europeas y latinoamericanas, que viven las arremetidas del neoliberalismo, es la gentrificación. El modelo neoliberal contempla, en sus programas orquestados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario, la pauperización de los grupos sociales más pobres, a través del desplazamiento de estas capas sociales bajas, de los centros o focos del urbanismo de las capitales; que en adelante son entendidas por las rapaces burguesías como nuevos espacios para el mercado inmobiliario. A la definición de nuevos espacios vistos como proyectos habitacionales en la ciudad, les sigue el crudo interés por los recursos que se encuentran accesibles a dicho mercado más allá de los centros urbanos, en este caso el agua y el bosque en Reservas Naturales. “Hoy la atención del mercado inmobiliario va dirigida a otros lugares, internos a la ciudad y con vocación de usar de forma transitoria la industria turística” asegura Gaia Redaelli.

El espacio donde se encuentra el Parque Nacional La Tigra, está inscrito en una serie de etapas que empujaron a la historia del país al tan aclamado “desarrollo” –emprendido por diversas generaciones de liberales– vinculado a un rubro económico en particular, en este caso, la minería. San Juancito, bajo la sombra de la mina El Rosario, se convirtió en la primera ciudad modelo



que representó ese proyecto de crear ciegamente en el gradual progreso material de un país a través de la extracción de metales. El costo social fue evidente luego del abandono del rubro a mitades del siglo pasado.

Hoy la Tigra es el centro de atención del grupo inmobiliario Midence-Soto-Pierrefeu, quienes a través de la constructora Santos y Compañía (que pertenece a la Familia de Elvin Santos, diputado del partido liberal), pretenden introducir un complejo habitacional denominado "Bosques de Santa María", que daría rienda suelta al mercado inmobiliario en una zona de amortiguamiento que ocupa una reserva natural, y que además abastece de agua a numerosos barrios y colonias de la capital. Se estima

que serían 130 colonias las que podrían quedar sin agua si el proyecto llegara a concretarse.

"La construcción, inició el descombramiento de la vegetación para la edificación de 1,886 residencias de lujo, 29 centros comerciales, un hotel de montaña, un club ecuestre y carreteras de penetración en un área de casi 500 hectáreas, de las que más de 100 son parte de la zona de amortiguamiento de la Tigra" (Criterio. hn, 29 de agosto de 2019).

Organicemos una amplia plataforma que le haga frente a los proyectos de despojo territorial en Guapinol y la Tigra

Los procesos de privatización de los tan preciados e indispensables recursos naturales como lo es el agua, avanzan en tres direcciones según lo plantea Tatiana Roa Avendaño y Danilo Urrea: "i) el control del Banco Mundial en la construcción de políticas públicas de agua..., ii) la pérdida de autonomía

del Estado bajo la administración de gobiernos entregados y arrodillados a los lineamientos de instituciones financieras internacionales y corporaciones transnacionales; y iii) los procesos de militarización de los territorios para asegurar el control de las fuentes y la explotación del patrimonio natural."

Hasta el momento la privatización del agua en la Tigra y Guapinol,



avanza en los tres niveles que plantean estos autores: las movidas del capital internacional y nacional a través del mercado mobiliario ya es un hecho, y lo promueven los representantes de la Cámara de Comercio e Industria del país, y la vil familia Facussé; el Estado ha puesto las circunstancias "legales" para que las instituciones como la Fiscalía y el Ministerio Público arremetan con el señalamiento de delitos que no caben para los ambientalistas, defensores de los recursos naturales, como ser "terroristas", "asociación ilícita", entre otras aberraciones; y finalmente, días atrás se confirmó la presencia militar en la zona donde los dos proyectos en ciernes, mantienen maquinaria pesada para descombrar las zonas verdes de los parques nacionales ultrajados. Hasta el momento, a las protestas justas que se viven en la Tigra, las acompañan la cruda represión con bala viva.

En el año 2006 los países latinoamericanos del norte y sur, avanzaron en la formación de una

"plataforma de organizaciones sociales de indígenas, campesinos, sindicalistas, académicos ambientalistas, entre muchos otros sectores," que le hizo frente a las directrices privatizadoras del Banco Mundial y el Consejo Mundial del Agua (CMA), que a través de un foro mundial del agua en Ciudad de México, pretendía debatir y luego promover la privatización de este recurso. Estas jornadas tuvieron como resultado –según lo narran Avendaño y Urrea– exponer el tema del agua desde una perspectiva aguda sobre la política internacional del control del agua, y además creaba así, los vínculos necesarios entre organizaciones que políticamente reivindicaban la razón comunitaria en la gestión de este bien común.

La tarea de nuestras agrupaciones nacidas en las comunidades afectadas, es concebir

una plataforma más amplia que una a todos los barrios y colonias de la capital –130 según lo afirman algunos diarios–, que, si de concretarse el proyecto en la Tigra, serían los primeros afectados por este desastre ambiental. También es necesario encarar a la Alcaldía, evidenciar las irregularidades de las instituciones que cedieron las licencias ambientales como Mi Ambiente y el ICF. Debemos manifestar descontento hacia las dependencias del Estado que se cuadran para facilitar proyectos no consensuados y aprobados a expensas de la decisión de las comunidades; y que además benefician a un grupo reducido de ricos que intentan adueñarse de los escasos recursos de la capital. Sólo la organización barrial, en colonias, y comunidades, podrá detener este proyecto que supone ser una amenaza para nuestras valiosas fuentes de agua. ■

UN BALANCE DE LOS 100 DÍAS DE GOBIERNO DE BUKELE

Por German Aquino

Nayib Bukele asumió la Presidencia de la república de El Salvador el 1 de junio del 2019. Participó electoralmente con la bandera de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), logrando derrotar a los partidos del bipartidismo: a la rancia derecha de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y al partido de la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Este último se habían mantenido en el gobierno los últimos diez años. Este triunfo electoral de Bukele agudizó la crisis interna del bipartidismo, la cual todavía no logran superar.

La población salvadoreña, más allá de las ideologías, demandaba solución a problemas fundamentales como son la violencia y delincuencia, corrupción y desempleo, que obliga a muchas familias a migrar principalmente hacia los Estados Unidos de Norteamérica. El gobierno de Bukele ha centrado sus programas y campañas mediáticas, en la búsqueda de solución de estos problemas, logrando captar la atención de la ciudadanía y mantener altos índices de aprobación hacia su administración.

Evaluar a cada gobierno en los primeros cien días se va haciendo costumbre, lo cual es prematuro, pero permite tener una idea del rumbo de este en los siguientes años. Por ello se hace necesario hacer dicho ejercicio de evaluación en lo que respecta al gobierno de Bukele-GANA.

Breve caracterización del gobierno de Bukele-GANA

Desde sus inicios, la conformación de gabinete de gobierno fue un misterio, pero una vez que asumió la Presidencia el público se enteró que está conformado por personas pertenecientes a GANA, familiares y amigos del presidente, así como también por personas disconformes de la derecha de ARENA y del FMLN. También debemos mencionar el nombramiento de funcionarios

provenientes de organizaciones sindicales, como es el caso de Rolando Castro, actual ministro de Trabajo.

Hasta el momento el régimen político tiene elementos que le apuntan más hacia el bonapartismo, es decir, una tendencia hacia el autoritarismo presidencial, lo cual de consolidarse sería desastroso para la clase trabajadora y sectores



populares. Bukele se nos presenta como el redentor que salvara al país de la vorágine de violencia y delincuencia que sangra al pueblo salvadoreño, pero para cumplir esos fines irrespete el mismo "Estado democrático de derecho". Bajo el gobierno de Bukele, las Fuerzas Armadas cada día usurpan funciones que le corresponde a la Policía Nacional Civil (PNC), incluso fortaleciendo los cuerpos de seguridad.

El gobierno de Bukele representa a un sector del empresariado salvadoreño, pero goza del visto bueno de toda la clase empresarial, hasta el momento. Al respecto, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) considera que, en lo poco que va de este gobierno, el Índice de Confianza Empresarial (ICE) ha subido. De igual manera Roberto Poma, quien es parte del gran empresariado, manifestó "...el gobierno está haciendo lo posible por cumplir sus promesas electorales"; sobre todo en el tema de seguridad. También estamos viendo que la relación con el sector privado en este momento se está fortaleciendo y se está generando un grado de confianza que va a ayudar a que el país

salga adelante... en los primeros 100 días las señales son bastante positivas" (EDH. 04/09/19).

A nivel de las relaciones internacionales, el Presidente Bukele es un fiel cumplidor de las políticas promovidas por el gobierno imperialista de Donald Trump. Bukele se ufana de haber "...restablecido las relaciones con nuestro mayor aliado internacional.

Esas relaciones están en su mejor momento... Altos funcionarios de Estados Unidos nos han visitado para crear acuerdos que nos ayuden al desarrollo" (EDH.09/09/19). Así mismo, ha mantenido un dura crítica hacia los gobiernos de Daniel Ortega en Nicaragua y el de Maduro en Venezuela.

Aunque es prematuro decirlo, en estos cien días la economía no se ha reactivado. El Estado, para su funcionamiento, ha tenido que recurrir nuevamente a

préstamos, en lugar de obligar al gran empresariado que pague impuestos sobre sus ganancias.

En síntesis, con el gobierno de Bukele estamos ante un modelo económico neoliberal en crisis, y un sistema de gobierno que avanza rápidamente hacia el bonapartismo.

Reducción de la violencia y delincuencia y sus costes

Desde la implementación de los planes de seguridad por parte del actual gobierno, los índices de muertes violentas se han reducido, las publicaciones periodísticas relacionadas también se han reducido. Los miembros de las maras y pandillas han sido obligados a realizar repliegues tácticos en las zonas que antes controlaban, lo que ha dado una sensación de efectividad de dichos planes. Este es el factor fundamental que contribuye a los altos índices de aceptación del gobierno de Bukele.

Los planes de seguridad implementados por el gobierno de Bukele, en parte son los mismos que los implementados bajo los



gobiernos anteriores, pero existen ciertas variantes como el hecho de incrementar el número de efectivos de las represivas Fuerzas Armadas en las labores de seguridad y dar órdenes de absoluta libertad de reprimir. Los costes de dicho planes han recaído sobre todo en la juventud quien sufre la represión, lo cual ha llevado a un mayor índice de jóvenes asesinados por los cuerpos de seguridad.

Según el presidente Bukele, en materia de seguridad "...Por primera vez, en décadas, hemos abierto el reclutamiento masivo de nuevos soldados, jóvenes comprometidos con su país, que ven el servicio a los demás, como una vocación". Nada más falso, muchos jóvenes se ha enlistado en el Ejército por necesidad, porque ven una oportunidad de trabajo para poder ayudar a sus familias, cuando estos jóvenes deberían de estar cursando estudios secundarios o superiores.

Los Planes Control Territorial en gran parte se financiarán vía préstamos "...solo hay fondos específicos para echar a andar tres fases (de las siete) por un monto total de \$575.2 millones, de los cuales \$200 millones serán deudas y el resto vienen del gasto de la Nación, del impuesto a la seguridad, de donaciones..." (EDH.09/09/19).

Si bien los planes de seguridad han logrado generar opinión pública favorable al gobierno de Bukele, solo están combatiendo los efectos más no las causas sociales que generan la violencia y la criminalidad.

La lucha contra la corrupción como arma política

La lucha contra la corrupción fue planteada desde los gobiernos del FMLN, uno de sus resultados fue sacar a luz pública actos de corrupción de los gobiernos de ARENA. Lo novedoso del gobierno de Bukele, es la conformación de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador (CICIES). Según Bukele, "... La CICIES nos servirá para prevenir, investigar y castigar actos de corrupción, porque el saqueo estatal debe parar y los que lo hicieron deben pagar...La CICIES será independiente, neutral y transparente, perseguirá al corrupto y al corruptor..." .

Desde sus inicios la CICIES es un proyecto que no tiene el consenso de todos los empresarios y demás

instituciones del Estado. No fue producto de un entendimiento entre los tres poderes del Estado. Estas contradicciones nos indican que la lucha contra la corrupción y la impunidad recaerá solo contra aquellos que sean adversarios políticos, siendo cobija de corrupción para otros que le son afines. Para combatir a los "corruptores", en realidad se deben investigar a los grandes empresarios que hacen negocios con los contratos del Estado.

Amenazas constantes hacia trabajadores de salud

En su discurso de cien días, Bukele nuevamente lanzó amenazas hacia los trabajadores de salud manifestando "...Ayúdenos a hacer lo imposible por sacar adelante lo que parece inalcanzable, los demás, los que sientan que están siendo explotados o que se les pide mucho, por favor, no permitan que los sigan explotando, déjenme inmediatamente sus plazas y denle la oportunidad a los demás que sí quieren atender a los pacientes como se merece. Duele ver cómo hay decenas de miles de profesionales de la salud en diferentes ramas, buscando una oportunidad con todas las ganas de atender a nuestro pueblo y no de poderle dar una oportunidad por una minoría y hago hincapié en una minoría de profesionales en salud, que no tienen la vocación y el amor para atender a nuestro pueblo que ya ha sufrido demasiado..."

Esto no es nada nuevo, recordemos que el miembros de la dirección del FMLN, tras la última derrota en las elecciones legislativas y municipales, culparon a los trabajadores de salud y educación de ser los responsables, atreviéndose a llamar a la población que realizara acciones en contra de los trabajadores.

El gobierno Bukele nuevamente busca desacreditar las justas luchas y demandas de los trabajadores de salud. Sin embargo, como bien lo dice, es una minoría la que no cumple y hace bien su trabajo, lo cual debe corregirse. La gran mayoría hace bien su trabajo, pero necesita que el gobierno garantice condiciones mínimas: medicinas, equipos, personal suficiente, mejores salarios, etc.

A nivel de salud como en otras áreas sociales, el gobierno mantiene un discurso populista, habla de

cantidad y no de calidad. Traslada la responsabilidad de las deficiencias a los trabajadores de salud. Se debe exigir una atención médica hospitalaria oportuna, eficiente y eficaz para todo el pueblo salvadoreño.

Violación a la autonomía e independencia sindical

En estos cien días se ha podido presenciar la más completa violación a la autonomía, independencia sindical e irrespeto a la voluntad de las bases sindicales. Una de ellas fue contra los trabajadores del seguro social. El Ministerio del Trabajo, transgrediendo todas las leyes, impuso una nueva Junta Directiva en el Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS). Por la forma en que fue impuesta, la nueva Junta Directiva esta amarrada y tiene compromisos con el actual gobierno. El STISSS es una de los sindicatos más fuertes y jugó un papel fundamental en la lucha contra la privatización de la salud. La imposición de una nueva Junta Directiva nos alerta de los planes de privatización que impulsara el gobierno de Bukele en el área de salud y seguridad social.

Unidad y acción

En estos primeros cien días, las acciones realizadas por el gobierno en materia de seguridad han sido percibidas de forma positiva por la población, pero también ha realizado acciones en contra de trabajadores públicos como son los despidos, etc, justificando que dichas plazas son innecesarias. El gobierno Bukele tiene un marcado espíritu anti obrero y antisindical. Bukele quiere manejar el Estado como si este fuera su propia empresa privada.

Las organizaciones sindicales y sociales no debemos permitir la división por parte del gobierno Bukele. Debemos solidarizarnos con las luchas de las demás organizaciones, tampoco debemos permitir la instrumentalización política partidaria de la cúpula del FMLN quienes hoy se quieren mostrar los verdaderos defensores de la clase trabajadora. Se debe desarrollar una coordinación de todas las organizaciones de cara a enfrentar a este nuevo gobierno. ■



G-7 EN FRANCIA: MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES.

Por Nicolás Lebrun

En un marco esplendoroso, en la costa del País Vasco francés, los líderes de las principales economías del planeta, a excepción de China y Rusia, se reunieron para tratar de avanzar en su reparto del mercado mundial en un periodo de una gran crisis.

Esta última tiene entre otros detonantes, las medidas adoptadas por la administración Trump tendientes a aumentar los aranceles a las exportaciones chinas entrantes en los Estados Unidos, además del embargo petrolero iraní que ha desatado una serie de roces en el estrecho de Ormuz así como en el estrecho de Gibraltar, donde un petrolero iraní fue detenido durante un tiempo sospechoso de violar el embargo al régimen de El Assad.

Pero lejos del bling bling en el cual se vio envuelta esta cumbre la realidad es menos placentera sobre todo para los países que han venido perdiendo puestos en la escala de los países más poderosos del planeta.

La hegemonía mundial sigue en manos yanquis pero....

Hace un siglo, el mundo despertaba de una de las más cruentas guerras jamás conocida. La Primera Guerra Mundial, una guerra interimperialista que llevó a la tumba a millones de obreros de los países metropolitanos así como de las colonias que tenían en ese entonces. Tal y como lo definió Lenin en su libro "El imperialismo fase superior del capitalismo" lo definió de esta manera: "la guerra de 1914-1918 fue una guerra imperialista (es decir,

una guerra anexionista, depredadora y de rapiña); una guerra por la división del mundo, por la partición y el reparto de las colonias y de las esferas de influencia del capital financiero, etc."

Esta masacre tuvo como cómplices a los partidos social demócratas que hoy se han convertido en partidos burgueses y que no se han sonrojado al aplicar los salvajes planes de austeridad a lo largo y ancho del continente. En el bando opuesto, solo un punado de activistas y dirigentes que tuvieron que salir al exilio para reorganizarse y protegerse de las

rol en el festín imperialista. Hasta ese entonces, los británicos eran la mayor potencia colonial y económica del orbe. Pero esta hegemonía se fue viniendo abajo hasta el punto que luego de la Segunda Guerra Mundial, los yanquis emergieron como la primera potencia económica y militar. En otros términos, al capitalismo monopólico no le queda otro camino que la guerra para imponerse a la competencia. En este caso los "competidores" son las burguesías de otros países que rivalizan por los mercados, capital financiero e influencia en los distintos rincones del globo.

En un pasado no muy lejano, el mapa del mundo estaba diseñado con los países metropolitanos (las potencias europeas) y sus colonias en Asia, África y América.

Luego de la segunda guerra, una ola de movimientos independentistas hizo que estos países perdieran paulatinamente sus colonias, no sin antes resistir mediante

cruentas guerras a perderlas. Las burguesías emergentes de estos países recién independizados se convirtieron en socios que luego exiliaron a las masas y esto sigue hasta este momento. La presencia militar yanqui se expandió a lo largo y ancho del mundo. Las bases militares en el continente europeo durante la "guerra fría" con el despliegue de misiles y otras armas nucleares. Esto mismo lo hizo en Asia, que empezó a ocupar este papel de gendarme en los albores del siglo XX luego de vencer a los españoles en la guerra de Cuba.

En este momento, estatus de la burguesía yanqui no ha cambiado, pero



hordas chovinistas que enceguecían a las masas trabajadoras. Esta crisis fue aprovechada por el partido bolchevique para tomar el poder y conformar el primer gobierno de la historia de la humanidad.

Pero, por otro lado, en el campo burgués, los ganadores fueron otros. Por un lado, la Entente conformada por Gran Bretaña, Francia y Rusia en sus inicios se vio debilitada por la irrupción revolucionaria. Los Estados Unidos, país que al principio del conflicto se mantuvo al margen de manera oportunista, terminó enviando sus tropas y armamento en la última etapa del conflicto para asegurarse un



se ve amenazado por la emergencia de nuevas potencias económicas en el orbe.

Los denominados Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sur África) que durante las últimas dos décadas han tomado protagonismo. Los tratados comerciales firmados por los yanquis en los cuales se han asegurado en el caso de los países semi coloniales como los de América Central y del Caribe importantes prerrogativas para los intereses de sus capitales e industria, se muestran insuficientes en este periodo de crisis iniciado en el 2008.

De estos países, el caso de China se ha vuelto en un verdadero dolor de cabeza para un sector de la burguesía yanqui. El lugar que ocupaba los Estados Unidos durante décadas fue ocupado por China. Según la OCDE, China se encontraba en el primer lugar en el periodo 2016-2017 con cerca de 230 mil millones de dólares de exportaciones contra cerca de 1500 millones de los E.E.U.U. Por el contrario, el monto de las exportaciones es muy superior en los Estados Unidos en el mismo periodo cerca 2500 millones de dólares contra 1800 millones aproximadamente para China.

Los episodios de escaramuzas comerciales dentro de esta guerra no han cesado. La devaluación de la moneda china, una maniobra utilizada por otros competidores comerciales en el pasado, no ha sido bien apreciada por los yanquis que claramente ven en ella una forma de paliar a los aumentos de los aranceles decretado vía twitter por el presidente de los E.E.U.U.

La administración Trump se ha encargado de tratar de replantear las bases de estos acuerdos y pasar de los multilaterales a los bilaterales. De esta manera podría asegurar una mayor relación de fuerzas a la hora de negociar fundamentalmente con los países antes citados, pero también con la UE.

El Brexit podría ser una oportunidad de torpedear desde adentro el bloque que representa la UE. Durante el G7, Trump ofreció al recién nombrado primer ministro Boris Johnson la posibilidad de llegar a un acuerdo en el caso de concretarse el Brexit.

El ex consejero de seguridad de la administración Trump, John Bolton afirmaba a mediados de agosto "Queremos ser útiles para el Brexit" (Le Figaro 13/08/2019)

En esta cueva de Alí Baba que representan los acuerdos y maniobras comerciales entre las potencias capitalistas, cualquier golpe es permitido y nadie tiene asegurado su lugar. En eso la Historia está llena de ejemplos.

En los puntos álgidos la temperatura aumenta y en Washington las cabezas ruedan

Como es conocido por su estilo megalómano, el presidente Macron quiso causar un golpe de efecto al llevar al jefe de la diplomacia iraní, Mohamad Zarif. Con esto, según Macron, las posibilidades de relanzar las conversaciones sobre el acuerdo nuclear podrían avanzar. Pero la realidad es tozuda. Los iraníes no pueden aceptar que el gobierno de Trump los lleve contra las cuerdas. En el mes de julio Teherán anunciaba ya el aumento del enriquecimiento de uranio por encima de los límites del acuerdo del 2015 y hace dos semanas sobrepasó la masa permitida por los mismos acuerdos. "El portavoz de la Agencia de Energía Atómica de Irán (AEAI), Behruz Kamalvandí, dijo en una ceremonia, en la planta nuclear de Fordow, que "actualmente la cantidad del uranio enriquecido de Irán es de entre 360 y 370 kilogramos". Ahora producimos con una buena capacidad y esta cantidad aumenta con rapidez", agregó el portavoz, según la agencia oficial IRNA. (DW 13/08/2019)

La crisis en Medio Oriente está lejos de aplacarse. La guerra en Siria a pesar del anuncio de Trump de retirar el grueso del contingente sigue alargándose. Los iraníes que han ganado terreno en este conflicto no van a ceder el terreno conquistado.

"El recrudecimiento de la guerra civil en Libia es otra de las vicisitudes de los yanquis y de los países imperialistas de la UE. El control de las zonas petroleras y la ola de migrantes hacia Europa hacen que las posiciones concuerden. En este rompecabezas, las

posiciones de los gobiernos rozan con el surrealismo. "Egipto y los Emiratos Árabes Unidos respaldan políticamente al Gobierno de oriente y militarmente a las FANL porque les preocupa el papel que los Hermanos Musulmanes puedan jugar en Trípoli; también Rusia apoya a Haftar. Por su parte, el Gobierno de occidente cuenta con el respaldo de Estados Unidos, Turquía y la UE; sin embargo, discrepancias entre Francia e Italia impiden que el bloque comunitario asuma una postura común. Aunque Francia e Italia han respaldado nominalmente al Gobierno de Acuerdo Nacional, ambos países europeos también han coqueteado con Haftar debido a su prominencia en la lucha contra los islamistas". (DW 5/04/2019)

Los Estados Unidos se niegan a jugar el papel que antes desempeñaban al menos en la forma, mas no en el contenido. Los halcones son partidarios de intervenciones que no impliquen un gran despliegue de fuerzas. Hasta ahora, los efectivos del ejército gringo no han sido masivos. La búsqueda de un acuerdo con los talibanes con los que se encuentran en guerra desde 2001 precede del anuncio de la disminución de 14000 a 8600 efectivos.

Este conjunto de medidas puede ser las que han dado origen a la caída de Bolton, partidario de las intervenciones preventivas y de una mayor presencia militar yanqui. La estrategia de Pompeo es de mantener la presión, pero aflojando sin reventar prematuramente.

Una salida de clase a la crisis

Los socialistas no nos hacemos ilusiones con las falsas salidas a la crisis. El capitalismo con rostro humano, un capitalismo sostenible y otras elucubraciones son solo de quimeras reformistas. Esta crisis ha sido causada por los mismos que no cesan de concentrar las ganancias.

La construcción del partido internacional con una política de clase se impone cada vez más como una tarea urgente de la cual nos proponemos ser parte. ■

15 DE SEPTIEMBRE 1842:

FUSILAMIENTO DE MORAZÁN Y MUERTE DEL PATRIOTISMO CENTROAMERICANO

Por Tyscho

Líneas interminables se han escrito sobre el héroe de la Batalla de Trinidad o el vencedor de Gualcho. El paladín centroamericano ha encontrado receptores de sus rudimentarias ideas de republicanismo, liberalismo y patriotismo centroamericano, a lo largo de los ya casi doscientos años de que naciera muerta a la vida la república que uniera bajo su efímera bandera las provincias que conformaran en el pasado el Reino de Guatemala en el centro del continente americano.

Estamos en las vísperas del bicentenario de la independencia 1821, conjura pactada por la oligarquía criolla y los burócratas españoles bajo la escarlata letra de la reacción, que reza en su primer artículo la declaración centroamericana: "Que siendo la independencia del Gobierno Español la voluntad general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el Sr. Jefe Político lo mande publicar para prevenir las consecuencias, que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo." Esta es la primera divisa que los criollos centroamericanos le dieron al pueblo, con su cada vez más creciente temor a las masas; se unirán muy a pesar de su patriotismo de palabra, tempranamente al grito del Plan de Iguala y al emperador con pies de barro Agustín de Iturbide, para resguardar y conservar sus privilegios ante el pueblo llano, al que acaban de libertar en el papel, esperando condenarlo en los hechos.

El carácter de la independencia centroamericana

En las antiguas posesiones españolas en la pretoriana Capitanía General de Guatemala se logró hacer la transacción pacífica en apariencias del poder y la autoridad de la corona hacia la autoridad dual de los que hasta ese entonces eran sus representantes militares y administrativos –burócratas y agentes del rey–, junto con el aumento y afianzamiento del poder de las familias criollas que mantenían



el monopolio del comercio con la metrópoli hacia la segunda década del siglo XIX. Esto a diferencia de otras latitudes, donde las conjuras, proclamas y revueltas de independencia desataron una cruenta guerra civil, entre realistas partidarios del orden colonial y los patriotas que luchaban por el establecimiento de repúblicas modernas, influenciados por la llegada tardía a las costas hispanoamericanas de las ideas ilustradas, emanadas de las revoluciones burguesas de finales del siglo XVIII, como lo fueron la de las 13 colonias inglesas y la gran revolución francesa.

En Centroamérica lo que debió haber sido una lucha a muerte entre el viejo y el nuevo régimen, terminó por ser un acuerdo reaccionario entre la élite de autoridades coloniales y sus

pares las pudientes familias criollas de la época. Toda esta transición promovida por el miedo a una independencia violenta, con un fuerte sentido popular y un carácter protagónico de los sectores populares y desraigados en el régimen colonial. El terror que en la oligarquía criolla producía la movilización popular encabezada por el cura Hidalgo en la Nueva España, fue suficiente para preparar una transición ordenada, donde el único perjudicado fuera el monarca a miles de kilómetros y no sus presentantes o los que hasta entonces hacían jugosos negocios con la metrópoli imperial, como lo eran los ricos criollos con sede en la Ciudad de Guatemala, capital del reino.

Se podría apuntar a manera de hipótesis, que es quizá en esta época donde empieza asentarse el carácter reaccionario y contra revolucionario de la casta criolla, como patricia y predecesora de la apátrida burguesía centroamericana. Antes que repetir la fórmula progresiva que encabezara el matuano Bolívar y el aristócrata San Martín, de aliarse con los sectores pobres y las masas populares coloniales, prefirieron en última pactar con los agentes del monarca y sacar a este último de la ecuación, tratando de echar adelante el proyecto de una república aristocrática alejada de la efervescencia y la movilización masiva del pueblo.

Divergencias criollas: El partido Gaz y el partido Caco

No se puede hablar para la época de partidos formales como se conocen hoy; éstos en todo caso son más parecidos a clubes económicos y

sociales, donde se mezclan los intereses de casta, con los cada vez más fuertes intereses de clase y de capa social. Para 1821 ya hay dos grandes grupos de partidarios a los adentros de la casta criolla en Centroamérica, posterior a la anexión y separación del efímero Imperio Mexicano; estas dos posiciones económicas y posteriormente políticas se endurecen y se afianzan.

Por un lado, están los partidarios del Gaz, apodados despectivamente por sus oponentes como un club de borrachos, conspiradores que forman las filas más olorosas de la oligarquía comercial criolla cuyo centro es la pujante Ciudad de Guatemala, capital de Centroamérica. En sus filas se encuentran los Aycinena, los Córdova, los Batres, los Pavón, los Arzú y los Montúfar y Coronado. Todos integrantes de familias de mediana y larga data en Centroamérica, muchos hijos de mercaderes y negociantes españoles que después de una aburrida acumulación de riqueza, se trasplantan a la política local, por medio del Cabildo, máximo órgano criollo durante la colonia. Unos incluso son tan acaudalados que compran títulos nobiliarios, como es el caso del Marqués de Aycinena, único noble en Centroamérica desde la desaparición física del adelantado Pedro de Alvarado.

Por el otro se encuentra el partido Caco, apodado despectivamente por los círculos oligarcas chapines del Gaz, y que hasta nuestros días no quiere decir otra cosa que: Ladrón. A este crisol de personalidades pertenecen dos tendencias que se irán marcando en el trascurso de la guerra civil que está por estallar en Centroamérica, que en su tendencia moderada está formado por el primer presidente del Centroamérica, el prócer Manuel José Arce, el posterior Jefe del Estado de Guatemala Mariano Gálvez, el fundador del Editor Constitucional, uno de los primeros periódicos, el agitador Pedro Molina, el abogado e hijo de prócer Alejandro Marure, todos cercanos a las ideas del federalismo y la división de poderes en la república del pensamiento inglés de Thomas Paine y los padres fundadores de los Estados Unidos.

En la otra ala del partido Caco se

encontrarán los llamados exaltados, fiebres o fiebres rojas, por su cercanía al pensamiento de los ilustrados europeos y de los jacobinos de la revolución francesa. Para ellos el liberalismo no podía vivir en contemplaciones con respecto al viejo régimen, era esencial acabar con las viejas trabas que éste ejercía sobre las vidas de los individuos, sus libertades políticas y comerciales. En esta última facción de los que después se conocerían como liberales



está el padrino político de Morazán, el Jefe del Estado de Comayagua, Dionisio Herrera; en su biblioteca Morazán forjará sus saberes sobre la ilustración y la revolución francesa.

La lucha por la supremacía del poder

Todo lo anterior es una necesaria radiografía para entender, que no fueron diferencias personales de bando las que dieron por resultado la primera guerra civil centroamericana, sino intereses económicos, materiales y privilegios particulares los que llevaron a las facciones criollas a encender la llama que ellos mismos habían buscado apagar con la independencia pactada con las autoridades coloniales.

Se puede entonces, a la altura de estas líneas, entender algunos pormenores materiales de la lucha. Al pactar la convivencia entre viejo y nuevo régimen, la oligarquía comercial criolla con su centro en Guatemala, solo buscaba conservar sus privilegios

ante el pueblo y por qué no, ante los productores, finqueros y hacendados de Centroamérica. Por ello el mote de conservadores, serviles e imperialistas que les dieron después del hundimiento del Plan de Iguala. Estos últimos eran los que más sufrían el monopolio comercial de las familias criollas chapinas, los que vieron en el abrazo a las ideas del liberalismo radical, de carácter más plebeyo, la forma de combatir los privilegios hereditarios y de nobleza que algunos serviles perpetuaban para ellos.

Se puede incluso empezar a describir cuáles serán los ejes del llamado bando centralista que terminará por ganar para su causa al liberal caco Manuel José Arce, que no es otra cosa que promover la supremacía de la Ciudad de Guatemala como centro de las decisiones políticas y económicas de toda la Unión Centroamericana. Aquí yace otra de las contradicciones con el que se llamará partido exaltado o fiebre, pues muchos de ellos no solo son productores de materias primas en las provincias periféricas de Centroamérica, como El Salvador –centro del liberalismo–, sino Honduras, Nicaragua y la distante Costa Rica, también son los medianos dueños de talleres textiles y comerciantes que deben sufrir el monopolio que las familias conservadoras ejercen sobre los puertos y los aranceles, incluso promoviendo la bancarrota del productor nacional favoreciendo al productor inglés.

Son todos ellos los promotores y la base social con la que cuenta el proyecto federal de Centroamérica, que triunfa en la primera Asamblea Constituyente, pues apoyados por el descrédito que ganaron los serviles al ser el partido que apoyó la anexión al imperialismo mexicano, son los liberales en sus dos alas, los que logran imponer la primera constitución centroamericana, con un marcado carácter de descentralización, liberalización de la economía y de la política, alejando a las familias de los cargos hereditarios y las trabas arancelarias que les favorecían. ■



ESTUARDO GÁLVEZ Y MURPHY PAIZ: DOS RECTORES, LA MISMA MAFIA

Por Hércilia Cáceres

Con posterioridad a que el gobierno de Jimmy Morales no renovó el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ésta se retiró el pasado 3 de septiembre, dejando 11 investigaciones pendientes con señalamientos de corrupción en manos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP). Entre las denuncias más destacadas, se encuentran los actos de corrupción en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), por parte del ex rector Estuardo Gálvez y del ahora rector Murphy Paiz.

Los manejos irregulares de la mafia en el poder

Las irregularidades primero, tuvieron lugar durante la administración de Estuardo Gálvez, en el lapso de sus dos períodos al frente de la rectoría de la USAC (2006-2014), en donde se presume que autorizó y gestionó ante el Consejo Superior Universitario (CSU) la realización de varios proyectos de obra gris y compra de terrenos, destacando 5 proyectos de obra, 1 por cotización y 4 por licitación. De los cuatro proyectos se investiga que: se adjudicaron proyectos a empresas con ofertas menos favorables para la USAC, presumible sobrevaloración del costo de las obras, ejecución parcial o la no realización de las obras y modificaciones en los contratos administrativos. De comprobarse las investigaciones, solo se concluiría con lo que ya todos los sancarlistas sabemos, que quienes han regido los máximos poderes de la única universidad pública del país, son una

suerte de mafia criminal.

Por su lado el actual rector Murphy Paiz, quien fungió como decano de la Facultad de ingeniería en el pasado y precisamente durante el rectorado de Estuardo Gálvez, es investigado por 62 proyectos de obra, de 482 contratos celebrados en su decanatura. A Paiz, se le adjudica que algunas de las obras no fueron construidas, en



otras se escogió la oferta más alta y se presumen sobrevaloraciones en los costos de las obras, además de que existe un grupo de obras que no se pueden ubicar por no poseer concursos de adjudicación claros y se detallan compras directas de consumibles que presentan irregularidades. El padrino político Estuardo Gálvez instruyó bien al saqueador que le sucede en su empresa criminal en la USAC.

Uno de los proyectos irregulares que saltan a luz del lado del actual rector, es precisamente la obra de construcción valorada en Q.864 mil, que comprende la construcción de un edificio de dos niveles para la Facultad de Ingeniería, dicho edificio no existe en la actualidad. Así mismo, se adjudicaron Q. 1.5 millones, destinados a la creación de áreas de estudio en las terrazas de los

edificios T-3 y T-4 de esa facultad, pero éstas tampoco existen. Por su parte, a Gálvez se le destacan irregularidades en la construcción del flamante edificio para la Dirección General de Administración (DIGA), brindándole la obra a la Constructora Vides por Q.26.4 millones; a dicha obra también se le suma otros desembolsos, uno por Q.329 mil a la empresa Constructores

y Asociados S.A. y, un proceso más por ampliación del contrato a la Constructora Vides por Q.13.8 millones para la construcción del sótano del mismo edificio. A esta construcción se le acusa de sobrevaloración y pago de favores políticos. Como se ha denunciado en anteriores números, el actual rector solo es continuador de la empresa criminal del ex Rector Estuardo Gálvez.

Los vínculos de Estuardo Gálvez y Murphy Paiz en la política nacional

Desde años atrás se ha vinculado en la misma línea política a Estuardo Gálvez y a Murphy Paiz, quizá los agentes más acabados de la reacción y la contrainsurgencia en la USAC. Este último ha mantenido las mismas políticas para la comunidad sancarlista que en el pasado promovió su padrino político Gálvez, destacando aquellas encaminadas a la privatización y a excluir a los sectores populares de la USAC. No es casualidad que las tomas universitarias y acciones de hecho, dirigidas por estudiantes después de los 2000 sean precisamente contra las políticas de estos dos personajes, la



primera en 2010, la segunda en 2013 durante la administración Gálvez y la última, entre finales de julio y agosto del presente año, durante el rectorado de Paiz.

Al actual rector se le ha denunciado públicamente como un político corrupto, que se encarga de maquillar la USAC con obra gris sobrevalorada que beneficia directamente a sus empresas o a sus prestanombres, para implementar políticas privatizadoras y adquirir beneficios personales para su grupo mafioso en el poder. Paiz también fue presidente del Colegio de Ingenieros de Guatemala (CIG) y se le llegó a asociar con el ex ministro de

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MCIVI) del desaparecido Partido Patriota (PP), el oligarca prófugo de la justicia nacional e internacional, Alejandro Sinibaldi Aparicio. De la misma manera, a Gálvez se le ha vinculado con el operador político y ahora preso por tráfico de influencias Roberto López Villatoro, mejor conocido

como "El rey del tenis", también acusado de corrupción durante el gobierno del PP. Además, al ex rector se le conoce por su relación con el partido TODOS, eje de la reacción conservadora en el Congreso y apoyo del ejecutivo durante la gestión de Jimmy Morales. Gálvez astutamente se alejó de la política nacional en 2015, cuando la CICIG amenazaba con destapar los casos corrupción de su administración en la USAC; en ese entonces Gálvez se disponía a ser candidato a Diputado Nacional por el partido TODOS.

Es tarea de la población perseguir y castigar a los ladrones del dinero público

Las denuncias realizadas por la CICIG destacan únicamente las irregularidades realizadas por Murphy Paiz durante su período como decano de la Facultad de Ingeniería, más no los procesos adjudicados en el tiempo que lleva como rector de la USAC, ya que en este tiempo se ha dedicado a gastar absurdas cantidades dinero en

obra gris, como los casi Q.3 millones utilizados para la remodelación de las entradas del Campus Central. Durante esta administración también se ha realizado otro tipo de remodelaciones y construcciones, que deben ser analizadas a profundidad, pues, en los concursos presentados en el portal Guatecompras, no siempre se favorece al mejor precio para la USAC, realizando compras sobrevaloradas. Cabe resaltar que a finales de 2018 la USAC se declaró en Plan de Austeridad por desfinanciamiento y se le brindó un préstamo leonino por \$.120 millones por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).



Para que se aprobara el préstamo por el BCIE se realizó un estudio previo, en el que se le daba prioridad a los Centros Universitarios, pero al obtenerlo las autoridades sacaron su carta bajo la manga y declararon que la mayoría de estos fondos sería utilizado en el Campus Central, enfatizando la infraestructura, en la que el rector se ha hecho de negocios sucios para continuar con su carrera política en la que ha ido escalando desde que fue estudiante.

Es interesante rescatar que la CICIG no hiciera de conocimiento público estos casos, ni en 2015 cuando la lucha anticorrupción contaba con la movilización de las masas en la calle, incluso que no hiciera publicidad de estos casos cuando el actual rector hacía pública su campaña para la máxima representación universitaria. Si bien es cierto que la comisión hizo uso discrecional de todos los casos, para ir limpiando el tablero de alianzas corruptas que enredan a la oligarquía nacional, a las fracciones

de las nuevas burguesías y a los organismos e instituciones del Estado, es menester recordar que la población es la única capaz de llevar a cabo un castigo ejemplar a los burgueses y sus agentes, que han usado la corrupción como forma de acumulación original.

Es necesario que la investigación sea de fondo contra todos aquellos que manejan fondos públicos, no es un secreto para nadie que decanos, autoridades administrativas e incluso docentes y estudiantes se ven involucrados a diario en ilícitos. Que las investigaciones también sean dirigidas a las estructuras criminales como lo son la mayoría de Comités de Huelga, Asociaciones Estudiantiles ilegítimas como las de la Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas, redes familiares y de políticos en la universidad que tienen capturadas las Facultades, las Escuelas y los Centros Universitarios de todo el país, así como en las elecciones de

magistrados a través de las comisiones postulación que se llevan actualmente a cabo y contralor general de cuentas públicas.

Que sean la comunidad sancarlista, esto quiere decir los estudiantes y sus organizaciones legales y legítimas, los docentes, los trabajadores y la población en general, los que fiscalicen el gasto que diariamente se desvía de sus fines y enriquece a un puñado de ladrones; por medio de luchas de largo plazo como la Reforma Universitaria se puede cambiar en los hechos la situación de saqueo sistemático de los bienes públicos que da el pueblo para el sostenimiento de la única universidad pública del país. Deben ser los sancarlistas, hijos e hijas del pueblo, quienes se encarguen de fiscalizar, recordando que los fondos de la única Universidad Pública son del Pueblo de Guatemala y para beneficio de ese mismo pueblo. ■



¿REPRESIÓN CONTRA EL COSEP?

Por Victoriano Sánchez

Desde el aplastamiento de los tranques en junio-julio del año 2018 la dictadura Ortega-Murillo ha mantenido una sistemática represión contra la oposición, para evitar que se repitan las manifestaciones masivas en su contra.

Ciclos de la represión

La represión se manifiesta de diferentes formas. Va desde las capturas ilegales contra los jóvenes activistas, el secuestro, hasta las amenazas contra sus familiares. Casi todos los capturados terminan siendo procesados penalmente, en juicios amañados, con pruebas falsas, que persiguen una condena a cualquier costo. Algunos de los ex presos políticos fueron nuevamente capturados, bajo cargos de delitos comunes (tenencia ilegal de armas, drogas, robo, asaltos, etc).

Otro mecanismo de represión ha sido el acoso y la persecución contra los ex presos, las unidades de la Policía Nacional se parquean frente a la casa de los opositores, toman fotos y videos, atemorizan a todo el vecindario. El resultado es que no hay movilizaciones en las calles, hasta los "piquetes express" han casi desaparecido, ante el terror que ha logrado imponer la dictadura.

No obstante, ante el anuncio de diversos organismos, de convertir el mes de septiembre en un mes de marchas y acciones contra la dictadura, esta ha respondido redoblando la represión a niveles nunca antes visto.

¿Represión contra el COSEP?

Desde que comenzó la rebelión de abril del 2018, no ha habido un solo empresario encarcelado o secuestrado. Esto se debe a que ellos no arriesgan el pellejo en las marchas o en los tranques, y que tampoco luchan por el derrocamiento de la dictadura. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) mantuvo una

alianza estratégica con el gobierno de Ortega, desde el 2007 hasta el 2018, fue la llamada política de diálogos y consensos, que fue rota por la insurrección de abril.

En ese momento, los empresarios dieron un bandazo y se pasaron a la oposición, pero debemos ser claros en afirmar que les tienen más miedo a las manifestaciones y los tranques, que a la dictadura. Por eso han tenido una posición timorata, de no apoyar los paros nacionales.



Ortega-Murillo castigaron estas veleidades democráticas de los empresarios del COSEP, tomándose las haciendas de algunos terratenientes, como Mike Healy, como mecanismo de presión para obligarlos a negociar por separado. Incluso, Ortega-Murillo castigaron a los empresarios donde más le duele: subieron los impuestos, para compensar el desfinanciamiento del presupuesto general de la república.

La crisis económica tiene desesperados a los empresarios. El malestar en las cámaras del COSEP contra el sempiterno presidente José Adán Aguerrí, se ha manifestado públicamente. En las recientes elecciones, otros empresarios ascendieron al liderazgo nacional del COSEP. En esta ocasión, no estuvo en juego la presidencia del COSEP. Fuertes rumores indican que la mayoría de las cámaras solicitan cambiar a José Adán Aguerrí en las elecciones del próximo año.

Incluso, este año no se produjo la tradicional celebración del día

del empresario, contemplada para cada 8 de septiembre. ¿El motivo? El enorme descontento de las cámaras empresariales contra la dictadura, a pesar de la actitud conciliadora y pactista de la oligarquía financiera-bancaria, y de los principales grupos económicos.

En este contexto se produjo el reciente atentado contra José Adán Aguerrí, en la entrada de la ciudad de León, cuando fue interceptado por turbas motorizadas que tiraron piedras y balines contra su vehículo. ¿El ataque contra Aguerrí pretendía atemorizarlo o levantarle el perfil como opositor, para que sea nuevamente reelecto como presidente del COSEP? Pronto lo sabremos.

Estudiantes de la UCA no pudieron marchar

En cambio, la represión contra los movimientos sociales se ha intensificado. Los estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) una universidad privada en manos de los jesuitas, anunciaron una marcha en el centro de Managua, para el día 9 de septiembre, con el objetivo de protestar por el recorte del presupuesto del 6% para las universidades, recortes que castigaron a la UCA por la actitud asumida por los jesuitas contra de la dictadura.

Muchos estudiantes de bajos recursos son becados con fondos del 6%. El resultado es que cerca de 2.000 estudiantes han perdido el derecho a la beca. Estos son los estudiantes que querían movilizarse, convirtiéndose en el primer intento de marcha para resolver asuntos puramente estudiantiles.

La marcha no se pudo realizar, las instalaciones de la UCA fueron rodeada por los cuatro costados por patrullas de la Policía Nacional, con tropas que usaban perros para atemorizar a los estudiantes. ■



¿A DONDE VA EL SALARIO MÍNIMO?

Por Diego Lynch

Este 29 de agosto del año 2019, se abrieron nuevamente las negociaciones para discutir el incremento al salario mínimo. En un país en que la crisis económica y el desempleo son el pan diario de cada día, la clase social obrera y trabajadora tenía una esperanza de lograr una gota de sangre para el paupérrimo salario con el que viven las familias nicaragüenses.

No obstante, dicho incremento siempre ha estado en manos del Gobierno del frente sandinista y la empresa privada (COSEP) quienes desde el 2007 hasta a la actualidad, han pactado unos míseros incrementos no apegados a la realidad del país sino a los intereses de la burguesía y del capital, del cual son parte la familia gobernante y su círculo más allegado. Sin embargo, con la supuesta ruptura que ha existido entre el gobierno y la empresa privada, había quienes pensaban esta vez sería distinto.

Tras defender las medidas económicas que el régimen de Daniel Ortega aplicó en el primer semestre para hacer frente a la caída de sus ingresos, que incluyó quitar exoneraciones a productos de la canasta básica y aumentar el aporte de los trabajadores a la Seguridad Social, la Central Sandinista de Trabajadores (CST) pedirá hoy un ajuste de entre tres y cinco por ciento en el salario mínimo, cuyas negociaciones comenzaran este jueves en el Ministerio del Trabajo. (La Prensa; 28 de agosto del 2019).

Este incremento que sugerían era de manera diferenciada, es decir un tres por ciento para las micro, pequeñas y medianas empresas; y para los trabajadores del Estado y demás sectores restantes, un incremento del cinco por ciento.

Propuesta es cortina de humo

La Central Sandinista de los Trabajadores es Pro Daniel Ortega,

estas propuestas que hacen ante los medios y ante sus bases y afiliados a quienes representan son falsas, son cortinas de humo con las cuales engañan a los trabajadores para mantener su clientelismo político, por ende, su estatus quo y sus cargos importantes dentro del frente sandinista y el gobierno, tales como diputaciones. Si realmente les interesara un verdadero incremento hace años hubiesen salido a las calles a protestar a como lo hacían en contra de los gobiernos liberales.

Obviando el impacto de las duras medidas económicas que aplicó Ortega en el primer semestre y sin presentar números que validen su tesis, Roberto González, Secretario General de la CST, dijo que la decisión que se tomó en el primer semestre de mantener congelado el salario mínimo significó para las empresas, sin importar su tamaño, "acumulación de ganancias" ... algunos dicen que se mantiene el precio (de la cesta) y hasta descabelladamente dicen más bien bajo el precio de la canasta básica. Con datos oficiales del Banco Central yo quiero contestarles a esos que le están mintiendo al país, a los trabajadores y al pueblo en general", dijo González, al mencionar que hasta julio la canasta se ubicaba en 14,159.79 córdobas, rompiendo la barrera de los 13 mil córdobas. (La Prensa; 28 de agosto del 2019).

Sindicatos, COSEP y Gobierno cierran filas

No obstante, los discursos populistas y demagogos que año con año vienen haciendo los mal llamados representantes de los trabajadores o supuestos dirigentes sindicales, a la hora de la verdad a todos se les caen las máscaras. La discusión por el incremento al salario mínimo fue resuelta de inmediato y de manera unánime, a como el matrimonio entre el Frente Sandinista y la burguesía empresarial del país estaban recién

casados y en luna de miel.

Los empresarios como es costumbre alegaron que existían dos vías; hacer un incremento y mandar al desempleo a miles de trabajadores o congelar el salario mínimo y que continúen generando ingresos a sus hogares, sin embargo, el mayor ingreso se lo generan a los burgueses y capitalistas, a los empresarios y jefes sandinistas afines a Ortega y Murillo, no así a los hogares de todos y cada uno de los trabajadores.

Defender el salario

Para el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), el salario mínimo en Nicaragua debe ser incrementado de manera porcentual al salario mínimo de todo el sector centroamericano; es urgente destituir y desaparecer esas centrales sindicales afines al frente que año con año venden el salario de los trabajadores para satisfacer las necesidades de la Burguesía Sandinista y Empresarial del país. Si ni el COSEP ni las centrales sindicales han sido capaces de llamar a un paro general para resolver la crisis política, económica y salarial del país, es necesario que los obreros y trabajadores nos organicemos y llevemos a cabo un paro general que obligue al gran capital a resolver la crisis que existe por las cuotas de poder que se discuten para gobernar.

El Gobierno utiliza el presupuesto y dinero del Estado para actividades partidarias, para reprimir a la población, para crear empresas familiares y enriquecerse cada más y jugar a ser el nuevo burgués de Centroamérica, y ante todo esto los más golpeados somos la población, quien paga los platos rotos de los conflictos de intereses entre el gran capital.

Incremento justo y digno; apegado al de toda Centroamérica y que cubra como mínimo la canasta básica. ■



LA DEMOCRACIA COSTARRICENSE: UNA TIRANÍA DE LA MINORÍA

Por José René Tamariz

Las clases dominantes de Costa Rica se ufanan en sostener que es una la democracia más antigua de América. Sin embargo, en los últimos años esto ha venido cambiando de forma y contenido de manera significativa.

Las bases económicas y sociales que hizo posible la existencia de la democracia costarricense como ejemplar ya no existe. El creciente endeudamiento tanto interno como externo realizado en los gobiernos de los partidos neoliberales PLN, PUSC y PAC ha comprometido seriamente el futuro del país en todas áreas, llevando a la democracia a ser una farsa y una verdadera tiranía minoritaria.

Esa gigantesca deuda pública que casi ronda el 60% del PIB ha provocado que, casi el 40% del presupuesto nacional se dedique al pago de los intereses de esa deuda, así como al creciente déficit fiscal. El país vive de a prestado lo cual lo hace, en cierto modo, tener una vida artificial. El presupuesto del 2020 solo se financiará el 56% con ingresos propios y el 48% con préstamos. Esta tragedia es debido a la política de apertura comercial y al modelo de promoción de las exportaciones que, de forma dispendiosa, otorga miles de millones en exoneraciones a gran escala al capital transnacional, así como la masiva evasión fiscal y la extensiva e intensiva corrupción del erario público. Con esos dineros no solo no habría déficit fiscal sino que tendríamos superávit.

El capitalismo depredador de las clases dominantes ha llevado al país a esta situación económica de endeudamiento, creciente déficit

fiscal, desempleo masivo, informalidad gigantesca y odiosa, aumento de la delincuencia, el narcotráfico y otros graves males sociales aquejan a la mayoría de la población. Asimismo, esas políticas criminales están llevando a la desaparición de las clases medias que hizo posible la otrora ejemplar democracia tica.

La cruzada actual contra la huelga, las organizaciones sindicales y sociales y los trabajadores del sector público para

convertido en lo que el marxista David Harvey sostiene que "... pedir prestado es hipoteca para nuestro futuro. La deuda es una trampa para nuestro futuro. Con los préstamos estamos limitando el futuro porque tenemos que pagar nuestras deudas...". (Harvey, David: ¿Por qué "El Capital" de Marx sigue siendo importante).

Actualmente la deuda pública asciende casi al 60% del producto interno bruto (PIB). Este creciente y gigantesco endeudamiento está conllevando a que para el año 2020 el 38% del presupuesto de la República se destine al pago del servicio de esa deuda pública. Es decir, solo el 62% de ese presupuesto queda para financiar todas las actividades de el Estado. Ello está llevando a las drásticas restricciones en todas las áreas del país.

Esa gigantesca deuda pública ha "hipotecado" el futuro del país y de sus ciudadanos. No hay posibilidad de desarrollo con semejante deuda.

Ese gran endeudamiento también representa un creciente déficit fiscal. Ambos graves problemas, deuda pública y déficit fiscal, las clases dominantes, con sus políticas económicas, fiscales, salariales y otras, pretenden que sean los trabajadores en general y, en particular, los trabajadores del sector popular, clases medias y sectores populares, los que paguen las "hipotecas" que ellos contrajeron por su incapacidad para administrar el Estado.

Por tanto, lo que existe actualmente es una lucha de clases en curso por imponer quién o quiénes deben pagar esa grave y dolosa "hipoteca nacional". Las clases dominantes y sus políticos



despojarlos de sus ingresos medios y de sus derechos fundamentales, como la huelga, son el mejor indicador de la decadencia de lo que fue la democracia costarricense. La eventual aprobación del proyecto 21.049 constituye un punto de inflexión de la democracia. De concretarse y convertirse en ley de la República ese nefasto y antidemocrático proyecto estaríamos en presencia de una democracia de la tiranía de una minoría contra la mayoría. Sería la extensión de la tiranía de la empresa privada al conjunto de la sociedad costarricense.

La deuda pública y de los hogares: una hipoteca sobre nuestro futuro

La creciente y abultada deuda pública de Costa Rica, compuesta por la deuda interna y externa, se ha



que contrajeron esa "hipoteca" no quieren pagarla y le están imponiendo a las clases dominadas semejante pago. Este es el centro, en el fondo y contenido, el conflicto social que atraviesa la conflictividad social. De la derrota o victoria de la lucha social y el enfrentamiento entre las clases sociales dependerá el resultado de ese conflicto. La pelea está en curso, aún no se ha definido de forma definitiva.

Por otro lado, las masivas y gigantescas deudas de los hogares costarricenses, compuesta por préstamos y deudas de tarjetas de crédito, es una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento. Ese gravísimo problema puede agravarse y reventar con la eventual recesión mundial que se viene. Miles de trabajadores podrían entrar en default, lo cual sería una grave crisis financiera.

El parasitismo financiero y rentista, usurero depredador, de los bancos, financieras y cooperativas, con sus altísimas comisiones, ha enriquecido de manera fácil y a manos llenas a los usureros modernos, parasitando como garrapatas sobre los salarios de los trabajadores y sectores populares, llevando prácticamente a una esclavitud de sobreendeudamiento a miles de hogares.

Al final, los trabajadores, clases medias y sectores populares, debemos imponer, mediante la lucha y el enfrentamiento social, la solución a esos graves problemas: Que la deuda pública y el déficit fiscal los paguen los capitalistas y sus partidos políticos que la contrajeron, no los trabajadores. Que se eliminen todas las grandes exoneraciones al gran capital transnacional; que se combata con confiscación y cárcel a los evasores; que se aumente el impuesto a las ganancias de los capitalistas; moratoria del pago de la deuda pública privada y externa.

¡Abajo el proyecto 21.182 que impondrá 12 horas diarias de

jornada laboral!

El proyecto de ley 21.182 que reformará varios artículos del Código de Trabajo para ampliar la jornada de trabajo, llamada "jornada extraordinaria", en el sector privado de 8 horas a 12 horas diarias por 4 días y, supuestamente, descansar 3 días, constituye a todas luces un nuevo sistema de sobreexplotación laboral de miles de trabajadores.



Da risa la justificación de motivos de los 12 diputados proponentes, entre ellos, Carlos Ricardo Benavides, Yorleny León y otros, para impulsar y aprobar ese odioso proyecto, típico del siglo XIX.

Estos diputados, agentes y testaferros de los capitalistas, señalan de forma cínica que ese proyecto se promueve para que los trabajadores puedan "descansar, estudiar y capacitarse", además, según ellos, los proles tendrán "mayor tiempo libre para disfrutar con su familia" y así "podrán conceder una mayor proporción de su tiempo a los hijos". De acuerdo con estos diputados canallas los trabajadores saldrán ganando con esa "nueva jornada extraordinaria". Es casi una propuesta "angelical" para ellos, casi la "gloria" pero de la superexplotación. Es todo lo contrario a sus objetivos. Es un engaño total.

En realidad, esa propuesta de jornada de trabajo es la más descarada, brutal y descarnada para imponer en el sector privado de los trabajadores la más despiadada sobreexplotación laboral. Trabajar 12 horas diarias es

extenuante, demoleedor y dañino para la salud de cualquier trabajador, ahora si es un trabajo muy duro y pesado el daño para la salud es peor. Pero, aún falta agregar a esa amañada propuesta. Es que se deja, en apariencia, tres días "libres" a los proles, lo cual es falso, ya que el capataz o supervisor le van a exigir, como horas extras, el día viernes e incluso el sábado a los trabajadores, lo que conllevará a jornadas de 56 horas, 60 horas o más. Será una

sobreexplotación parecida a los albores del capitalismo. Impensable en una democracia "moderna".

Los sindicatos deben oponerse con todas sus fuerzas a semejante propuesta de reforma del código de trabajo. Deben realizar una campaña masiva contra esas contrarreformas laborales. ¡NO AL PROYECTO 21.182!

El poder fantasmal de Carlos Alvarado

El presidente de la República de Costa Rica no es presidente por si mismo sino que es el producto de una serie de relaciones. Sin esas relaciones es un simple mortal con todas sus debilidades, falencias, sus desgracias y sus tonterías.

Carlos Alvarado, como presidente de la República, es sostenido en el poder por esas relaciones y las fuerzas policiales. Lo sostienen los empresarios nacionales y transnacionales, las cúpulas de los partidos neoliberales, los tecnócratas de los diversos ministerios e instituciones públicas, así como un puñado de gente que ha recibido alguna prebenda o favor del gobierno, en síntesis, una minoría.

Sin ese apoyo minoritario y poder policial Carlos Alvarado no resistiría unos días en el poder. Sus límites y fragilidad se hace evidente cuando tiene que huir en un carro presidencial, de forma escondida y escoltado por agentes de la DIS, de la provincia de Limón por temor a ser vapuleado por el pueblo enojado. ■



¡NO AL ESTADO DE SITIO! ¡NO A LA REPRESIÓN CONTRA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS!

Por Armando Tezucún

El Aprendiz de dictadorzuelo Jimmy Morales no podía finalizar su período presidencial sin darse el gusto de decretar otro Estado de Sitio. El pretexto fue un confuso incidente en la comunidad de Semuy II, El Estor, Izabal, en el que perdieron la vida tres soldados y otros tres quedaron heridos. Según la versión del ejército, una patrulla de la brigada de marina del Lago de Izabal, conformada por nueve elementos, se desplazó siguiendo el rastro de una aeronave supuestamente de narcos, que aterrizaría en una pista clandestina. La patrulla llegó a la comunidad mencionada, donde fueron emboscados por pobladores armados; según esta versión el destacamento fue desarmado y con sus mismas armas fueron asesinados los tres elementos, aunque el examen forense determinó que las muertes fueron causadas por impacto de escopetas, que no figuran en el armamento del ejército.

Una segunda versión la dio el excomandante guerrillero Julio César Macías, alias César Montes, quien dirige la Fundación Turcios Lima, que opera en la región y ha organizado a pobladores en "batallones de paz", aunque él mismo posee una empresa de extracción de mármol. De acuerdo con Montes, un destacamento de 15 soldados pasó por Semuy II, alertando a la población, pues su presencia en la región es inusual. Al pasar de regreso el destacamento, fueron esperados por un grupo de 100 personas, lo que alteró al oficial, quien ordenó disparar contra los pobladores; dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Izabal. Según declaraciones de comunitarios a Telesur, los militares dispararon primero y mataron a cuatro personas.

El 4 de septiembre, el presidente Morales acompañado de su gabinete decretó el Estado de Sitio por un período de un mes en 22 municipios ubicados en seis departamentos. Luego del decreto presidencial, el Congreso lo aprobó en tres lecturas; los legisladores solamente hicieron algunos cambios, para establecer controles a los gastos y



prohibir la contratación de obra pública durante ese período.

La prohibición de libertades básicas en una zona tan extensa, lejos de la comunidad en que ocurrieron las muertes, sin que se haya realizado una investigación exhaustiva de los hechos, del que, como vimos hay versiones contradictorias, indica segundas y terceras intenciones de parte del gobierno y quienes están detrás de él. Esta es una región que históricamente ha vivido conflictos entre los pobladores y empresas mineras y de palma aceitera. En el anuncio del decreto, Morales se refirió a "seudo defensores de derechos humanos" y "seudo campesinos", a quienes acusó de tener vínculos con el narcotráfico. Además, pretende, amparándose en los hechos, justificar las compras de armamento y equipos para fortalecer al ejército: "quizá ahora se entienda la necesidad de dotar al Ejército de las capacidades para proteger nuestro espacio aéreo, mar y tierra" (Prensa Libre 5/09/19).

El historial de conflictividad de la región se remonta a la Reforma Liberal

de finales del siglo XIX, cuando el Estado repartió las tierras, dejando por fuera a las comunidades q'eqch'ies. En algunos sectores ha sido la extensión de los cultivos de palma aceitera la que ha desplazado a las poblaciones, privándolas de sus terrenos. En 2012 el ingenio azucarero Chabil Utzaj fue fuente de graves desalojos y muertes contra la población indígena. En 2016 el abuso de las empresas de palma causó la invasión de la finca Plan Grande y el incendio de las plantaciones. Desde el año 1970, la explotación de mineral de níquel en El Estor, departamento de Izabal, que ha pasado de manos de una empresa extranjera a otra y ha sido favorecida por muchos gobiernos, ha dejado una estela de muertes, conflictos, violencia y ataques armados contra las comunidades q'eqch'ies de la región. Por esta razón las cámaras empresariales han aplaudido la medida tomada por Jimmy Morales y sus secuaces para implantar el orden. Por ello el heredero de Morales, Alejandro Giammattei, ansioso por tomar el puesto de dictadorzuelo, aplaudió la implantación del Estado de Sitio, llamando a atacar, ya no al narcotráfico sino a "los focos de subversión" (Prensa Libre 9/09/19), y acusando a César Montes de armar gente en el departamento de Alta Verapaz. Mientras, se espera la llegada de 1,200 soldados al sector, uno de los acusados de la muerte de los militares, Agustín Chub Chub, fue encontrado muerto, presuntamente por suicidio, y César Montes tiene orden de captura.

Lo que está sucediendo en Izabal es una muestra de lo que nos espera con el gobierno de Giammattei. Por ellos llamamos a las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, estudiantiles, de mujeres y populares a coordinarnos en un frente contra la represión, para poder enfrentar los ataques que se avecinan. ■